

ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN COMO RESERVADA DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON FOLIO 280518324000072.

**Unidad Administrativa solicitante: Auditoría Especial para Ayuntamientos
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 06 de noviembre de 2024.**

Resolución del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, que confirma la clasificación de la información respecto a la solicitud de información con folio señalado al rubro.

A N T E C E D E N T E S.

I. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. El nueve de octubre del año en curso, la Unidad de Transparencia de esta Auditoría Superior, recibió la solicitud de acceso a la información registrada por medio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia con el número de folio 280518324000072, mediante la cual se requirió lo siguiente:

"Solicito copia escaneada de las observaciones hechas a la cuenta pública del año 2022, realizadas a la COMAPA de Reynosa"(Sic)

II. TURNO. La Unidad de Transparencia, de conformidad con el artículo 39, fracciones II y VIII, y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, turnó la solicitud a la Auditoría Especial para Ayuntamientos, por ser la Unidad Administrativa que puede poseer dicha información, de acuerdo al Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado y su Manual de Organización.

III. RESERVA DE LA INFORMACIÓN. En fecha dieciséis de octubre del año en curso, se recibió el oficio número ASE/AEA/0594/2024 signado por la Titular de la Auditoría Especial para Ayuntamientos, mediante el cual, dicha Unidad Administrativa funda y motiva la clasificación de la información como reservada requerida por el ciudadano solicitante.

Lo anterior, haciendo alusión a que si bien es cierto, toda información que se

encuentre en posesión o bajo control de esta Auditoría Superior del Estado es accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establecen en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, también lo es que, la información solicitada, a consideración de la Unidad Administrativa, se encuentra dentro de los supuestos de reserva señalados en el artículo 117 fracciones V, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, pues la información requerida versa sobre observaciones contenidas en los Pronunciamientos del Informe Individual y las Promociones de Responsabilidades Administrativas de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022 de la entidad fiscalizada referida en la solicitud, por lo que se tiene que aún se encuentra en proceso de seguimiento dentro de los plazos legales previstos en la Ley de la materia conforme a lo previsto en el artículo 16, fracción XVII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas. Al encontrarse la información solicitada en proceso de seguimiento dentro de los plazos legales establecidos por la normativa aplicable, su divulgación en este momento implicaría un riesgo real, demostrable e identificable.

Con base en los antecedentes referidos, este órgano colegiado procede a dictar los siguientes:

CONSIDERANDOS.

I. COMPETENCIA. Con fundamento en los artículos 44, fracción II, 103 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, fracción IV, y 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas; dispositivo séptimo, fracción II, de los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*; el Comité de Transparencia de este órgano fiscalizador, tiene competencia para emitir el presente acuerdo.

II. MATERIA. El objeto de la presente resolución es analizar las razones expuestas por el área competente, en este caso la Auditoría Especial para Ayuntamientos, para la clasificación de la información como reservada derivada de la solicitud

registrada con el número de folio 280518324000072, en términos de los dispuesto en los artículos 100 y 113 de la Ley General, así como los diversos 117 y 152 de la Ley Local, ambas de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, cuarto y quinto de los *Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información*, así como para la elaboración de versiones públicas.

III. ESTUDIO DE FONDO. En el presente caso, y conforme a los antecedentes, el objeto de análisis se limita a determinar la confirmación o no de la clasificación de la información realizada por la Titular de la Auditoría Especial de Ayuntamientos, en relación con la solicitud de información bajo estudio. Dicha titularidad consideró que se actualizan los supuestos previstos en las fracciones V, VII, VIII y IX del artículo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, al estimar que la divulgación de la información afecta el desarrollo del proceso deliberativo.

El sujeto obligado se encuentra aún dentro del plazo establecido para dar seguimiento a los Pronunciamientos sobre el Informe Individual y las Promociones de Responsabilidad Administrativa relacionados con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022, conforme a lo dispuesto en el artículo 16, fracción XVII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas. Esta consideración es relevante, ya que la información solicitada se refiere a las observaciones que, en su caso, podrían derivar en la promoción de responsabilidades administrativas por parte de la Auditoría Superior del Estado, respecto a aquellas que aún no han sido solventadas por las Entidades Fiscalizadas, tal como se indica en la solicitud de mérito, relacionada con la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022.

Pues bien, partiendo de la premisa, que el acceso a la información es un derecho contemplado en nuestra Carta Magna, también lo es, que no puede caracterizarse como uno de contenido absoluto, tal y como lo establece el Alto Tribunal del País en la tesis aislada con número de registro 191967 de la novena época, publicada

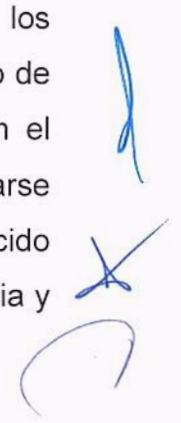
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente:
"DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS."

En concatenación con lo anterior, es procedente invocar la diversa tesis con número de registro 2021411 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el diecisiete de enero de dos mil veinte, cuyo rubro y contenido son los siguientes:

"DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA RELACIÓN CON SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES NO DEBE PLANTEARSE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS. La clasificación de la información como reservada corresponde al desarrollo del límite previsto en el artículo 6o. constitucional referente a la protección del interés público, mientras que la categoría de información confidencial responde a la necesidad de proteger la vida privada de las personas y sus datos personales. Desde esta perspectiva, resulta necesario entender que la relación entre el derecho a la información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados, no se da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter ponderativo, en la medida en que la natural tensión que pueda existir entre ellos, requiere en su aplicación un equilibrio necesario entre el ejercicio efectivo del derecho a la información y la indebida afectación de otro tipo de bienes y valores constitucionales que están instituidos también en beneficio de las personas. Es por ello que si se reconoce que ningún derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces debe igualmente reconocerse que ninguno de sus límites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre ambos extremos debe plantearse en los mismos términos de equilibrio".

De lo expresado en líneas precedentes, se advierte que para clasificar la información como reservada debe realizarse una ponderación de derechos, entre el ejercicio efectivo del derecho a la información y la afectación de otro tipo de bienes jurídicos, lo que se traduce esencialmente como la aplicación de la prueba de daño.

Ahora bien, cuando la información se clasifica como reservada, deberá ser protegida y resguardada cumpliendo con la Ley de la materia, su reglamento y los Lineamientos competentes, dándole en todo momento el tratamiento necesario de reservada para su manejo adecuado. Además, los supuestos señalados en el artículo 117 de la Ley Local en materia de Transparencia, deberán fundamentarse y motivarse a través de la aplicación de la prueba de daño, por así estar establecido en el artículo 118, en concordancia con el 107 y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.



Por lo anterior, se procede a fundamentar, motivar y justificar la clasificación de información referida con antelación, de la siguiente manera:

IV. PRUEBA DE DAÑO.

En primer término, se invocarán los supuestos actualizados tanto en la Ley General, como en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas; el punto 2, se orienta a verificar que exista un riesgo para el interés público o la seguridad nacional, derivado de la publicación de determinada información; el punto 3 se basa en que una vez que se acreditó el riesgo, éste se pondera con el interés público de conocer la información, demostrando que el riesgo que se pudiese ocasionar supera el interés de acceder a la información; y por último, el punto 4 hace alusión a desglosar la ponderación a través del principio de proporcionalidad, el explicar por qué se optó por la reserva de la información, procurando provocar el menor daño a los intereses del solicitante.

1. La información solicitada se encuentra prevista en alguna de las hipótesis de reserva que establece:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

“Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

...

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

...”

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas

ARTÍCULO 117. Podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación:

.....

V.- Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al

cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

VII.- Contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, cual deberá estar documentada;

...

2. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público:

Riesgo real, demostrable e identificable: La divulgación de la información solicitada atenta con los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos y el debido proceso, así como las actividades de auditorías que lleva a cabo este Órgano Fiscalizador, toda vez que aún prevalece el plazo previsto para promover responsabilidad administrativa sobre las omisiones o respuestas emitidas por las entidades sujetas de fiscalización, en este caso de las referidas por el solicitante, acorde a lo previsto en el artículo 16, fracción XVII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, eso es así, considerando que la información relativa a las promociones de responsabilidades administrativas son, entre otros, supuestos en los que pueden derivar observaciones emitidas, en este caso, por la Auditoría Superior del Estado, respecto de la auditoría a la Cuenta Pública 2022 del Ente Sujeto a Fiscalización referido en la solicitud.

En el caso concreto, la información en cuestión forma parte del proceso administrativo correspondiente a la auditoría mencionada previamente. Dicha información se encuentra en proceso deliberativo, ya que este órgano fiscalizador sigue en fase de seguimiento de los Pronunciamientos sobre el Informe Individual y las Promociones de Responsabilidades Administrativas vinculadas a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022 de la entidad solicitada.

Entonces, la difusión de dicha información, en esta etapa que se encuentra inconclusa, podría ocasionar obstrucción del procedimiento y a las líneas de investigación que el área competente debe seguir para encontrarse en aptitud de emitir la resolución administrativa correspondiente.


Por tanto, la solicitud efectuada de información pública, deviene en la actualidad de un procedimiento administrativo que a la fecha no ha causado estado, pudiendo dejar al descubierto los elementos, estrategias y medios de prueba que las partes aportan sin que hasta la fecha hayan sido admitidos y valorados y que no se ha dictado un fallo de forma definitiva y por consiguiente causado estado, advirtiendo el riesgo real, demostrable e identificable al proporcionar una información que está sujeta a trámite y que no está firme, por lo que puede afectar a las partes contendientes, a terceras personas y al desarrollo del procedimiento, vulnerando el debido proceso, en concatenación que se puede afectar las actividades de auditoría que se están llevando a cabo.

Motivo por el cual, reservar la información es lograr el eficaz avance del proceso de responsabilidad administrativa al que se hace referencia, específicamente por cuanto a la sana e imparcial integración del expediente, desde su apertura hasta su total solución.

En virtud de lo anteriormente manifestado, queda precisado que la información requerida es susceptible de reserva ante el inminente riesgo real, demostrable que se ha advertido y plenamente identificado.

3. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda:

En el caso concreto, debe analizarse la petición, la cual se refiere a información deliberativa derivada de los informes emitidos en las auditorías solicitadas por el peticionario, así como de las posibles promociones que pudieran presentarse en caso de que las observaciones de mérito no sean solventadas. En este sentido, se resalta que el bien jurídico que se pretende proteger es la función administrativa, particularmente en su vertiente de servicio público y combate a la corrupción.



En ese orden de ideas, la responsabilidad administrativa se puede traducir no sólo como un mecanismo de sanción de la corrupción, sino como una herramienta para la salvaguarda de los derechos humanos de los gobernados, y que su procedimiento tiene como objeto el de proteger el servicio público y/o la correcta prestación del mismo, lo que implica la estricta observación a los principios y directrices que establece la Ley en la materia.

Por lo anterior, de darse a conocer la información solicitada, se causaría daño a la libre conducción de una investigación que, como todas las de esa naturaleza, tiene por objeto esclarecer hechos en los que pudieran existir faltas administrativas y presunta responsabilidad administrativa, ya que el sigilo natural de la investigación se vería trastocado, obstruyéndose así la misma y la determinación correspondiente que se llegase a emitir.

Adicionalmente, este Órgano Colegiado considera que los servidores públicos sujetos a investigación, gozan del derecho fundamental de presunción de inocencia, en tanto no se haya declarado firme la sanción que en su caso les sea impuesta, por lo que dicho principio se encuentra por encima del interés público general de conocer los oficios materia de la solicitud, que originaron un procedimiento que se encuentra en trámite; por lo tanto, existe un riesgo de perjuicio irreparable que pudiese superar la divulgación de los documentos de un procedimiento que se encuentra en trámite y no ha causado estado, pues de darse a conocer dicha información, los derechos de las personas involucradas se podrían ver trastocados, generándose un daño irreparable; cuestión que incluso no podría ser subsanada con un probable fallo absolutorio.

Bajo esa tesitura, la información de la cual se solicita su divulgación está protegida por un interés colectivo de la sociedad, plasmados en derechos humanos fundamentales contemplados por el legislador en la parte dogmática de la Carta Magna como los son el debido proceso, legalidad, el combate a la corrupción y el servicio público; entendiendo que al hacer un juicio de ponderación y de

proporcionalidad, es imperativo hacer alusión que es del interés general de todo ciudadano que exista un adecuado desarrollo de la justicia en materia de responsabilidades administrativas, quedando por encima del derecho al acceso a la información pública, entendiendo que la reserva es únicamente de carácter temporal por lo que el derecho de acceso a la información no se vulnera, pues se dejan a salvo las prerrogativas para conocer de lo solicitado, hasta en tanto concluyan todas las etapas del procedimiento y cause firmeza.

4. La limitación se ajusta al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

La presente restricción es la idónea, en virtud de que constituye la única medida posible para proteger en el caso que nos ocupa, la actuación de la autoridad competente, hasta en tanto no se emita la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento; así como evitar que se obstaculicen las actividades de auditoría que se llevan a cabo a las entidades a las que se hace referencia en la solicitud en comento, pues éstas aún no culminan en virtud que aun corren los plazos previstos en los artículos 39 y 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas.

En ese orden de ideas, derivado de las funciones y atribuciones conferidas al sujeto obligado, las promociones de responsabilidades administrativas son una de las consecuencias derivadas de las observaciones emitidas por este Órgano Fiscalizador, respecto de las auditorías practicadas a los entes fiscalizables referidos en la solicitud de información relativas al ejercicio fiscal 2022; auditorías que aún se encuentran en proceso y dentro de los plazos legales para efecto de que se pronuncien al respecto, por lo que una vez culminadas, la información será pública, según sea el caso.

Finalmente, se justifica, fundamenta y motiva, reservar la información solicitada al constituirse en una medida, como ya se dijo, temporal de restricción a la información

por obstruir las actividades de verificación, inspección y auditoría, obstruir procedimientos para fincar responsabilidades a los servidores públicos, además de contener opiniones, recomendaciones o puntos de vista que siguen siendo parte de un proceso deliberativo, mismo que, se reitera aún no ha culminado, por lo que la medida adoptada es proporcional y no excesiva, pues la clasificación corresponde con el nivel y probabilidad de perjuicio que ha sido previamente razonado.

Por lo tanto, es procedente que este H. Comité de Transparencia confirme la reserva de la información relacionada con la entrega de información deliberativa respecto a observaciones contenidas en los Pronunciamientos del Informe Individual y las Promociones de Responsabilidades Administrativas de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022 de la entidad fiscalizada referida en la solicitud, por un periodo de cinco años, dado que el procedimiento administrativo correspondiente aún se encuentra en curso y no ha adquirido firmeza. Cabe señalar que estos plazos pueden ser prorrogados conforme a lo establecido en la Ley aplicable. Lo anterior, como se ha fundamentado en las consideraciones de hecho y de derecho contenidas en la presente prueba de daño.

V. DECISIÓN. Este Comité de Transparencia considera procedente **confirmar** la clasificación de reserva de información de la solicitud que nos ocupa, pues el marco legal establece claramente que la información que sea clasificada como reservada, no podrá ser entregada; en virtud de que se considera que la divulgación de la información deliberativa solicitada, representa un riesgo real, demostrable e identificable, ya que forma parte de un proceso que no ha causado estado.

En ese orden de ideas, no puede permitirse el acceso a la información requerida, en tanto no se concluyan las actuaciones, conforme a lo establecido en el artículo 117 fracciones V, VII, VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas; pues se estima que la valoración de la prueba de daño debe entenderse a partir de elementos que inciden en la eficacia de la toma

de la decisión que se llegue a emitir, así como la correcta aplicación; lo que en la especie evidentemente acontece; ello, porque puede dar lugar a diversas incidencias que pueden afectar el debido proceso y vulnerar derechos constitucionales.

En conclusión, el objeto primordial de la causal de reserva es cuidar la eficacia de la emisión de los pronunciamientos respectivos, el debido proceso y los procedimientos para fincar responsabilidades administrativas a servidores públicos, ya que proporcionar datos previos, genera riesgos en los procesos señalados anteriormente.

Por lo antes referido, este Comité de Transparencia confirma la reserva temporal de la información solicitada hasta en tanto no cause estado el proceso administrativo y culmine el proceso de auditoría y fiscalización a dichos entes públicos mencionados en la solicitud de información.

VI. PLAZO DE RESERVA. Conforme al artículo 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 103 numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen que deberá indicarse el plazo de reserva de información así como las razones del mismo, por lo que atendiendo a las causas que dan origen a la reserva de los datos antes precisados, el plazo de reserva de esa información es, como regla general, el de cinco años, atendiendo a que se extiende hasta que se emita la última resolución posible; por lo que, dada la fecha en que inició el proceso que nos ocupa, data del ejercicio fiscal 2022, es por lo que se establece un plazo de cinco años, en la inteligencia de que dicho plazo podrá concluir previamente, siempre que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, o bien, ampliarse de manera fundada y motivada. Lo anterior, computándose a partir de la fecha del dictado de esta resolución.

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38, fracción IV, 117 fracciones V, VII, y VIII, y 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tamaulipas; y los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*; este Comité de Transparencia, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN.

PRIMERO. Se confirma la clasificación de reserva temporal de la información en los términos señalados en los considerandos de la presente resolución, por unanimidad.

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que realice la notificación al solicitante mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.

Notifíquese a la persona Titular de la Auditoría Especial para Ayuntamientos.

La presente resolución fue aprobada por unanimidad por los integrantes del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, en su **Séptima Sesión Extraordinaria**, celebrada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el **seis de noviembre de dos mil veinticuatro**.


PRESIDENTA


Mtra. Adriana Hernández López.
Titular del Órgano Interno de Control.

SECRETARIA


Lic. Karla Neyra Gámez Beaz.
Titular de la Dirección de Control y Evaluación.

VOCAL.


Mtro. Óscar Alberto Lara Sosa.
Director General de Asuntos Jurídicos.